

AGENDA CIUDADANA

DE POLICÍAS Y PERDIDA DE INDEPENDENCIA

Lorenzo Meyer

Un Problema Nuevo.- En el período "clásico" de nuestro régimen político --antes del 82--, se temía que las pérdidas de la relativa independencia del gobierno mexicano frente a su poderoso vecino del norte serían resultado de acontecimientos en el campo de la economía --como efectivamente ocurrió--, pero no en el de la policía y la seguridad, como está sucediendo ahora.

Los cuerpos policiacos pueden ser tomados como uno de los mejores indicadores de la naturaleza íntima de la relación entre clase dirigente y sociedad. En el caso mexicano, ese indicador es particularmente vergonzoso, y así lo muestra tanto la historia y tradición de las policías como sus características, métodos, ineficacia, relación con el poder, con el mundo del crimen y con la población civil.

La Radiografía.- Desde el punto de vista de la sociedad, la policía es, en términos generales, ineficaz en grado extremo, pues de los delitos denunciados --que son únicamente una parte del total--, sólo un puñado se resuelven; en el caso de la Ciudad de México apenas si 25 de cada mil delitos denunciados tuvieron una solución formalmente satisfactoria en 1995 (cifras tomadas de Rafael Ruiz Harrell, *La Jornada*, 22 de enero, 1997), y eso que, *per capita*, la capital mexicana tiene el doble de policías que Londres. Esas policías ineficaces son también corruptas en extremo; una subdelegación de la Policía Judicial Federal en Tijuana se llega a cotizar en el "mercado", en un millón de dólares, (*La Jornada*, 9 de agosto de 1996). A pesar de la

existencia de organismos protectores de los derechos humanos, las policías mexicanas usan de manera sistemática de la tortura contra los detenidos; a esa conclusión se llega examinando lo mismo la prensa que lo expresado el 2 de mayo de 1997 por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra (*Reforma*, 15 de abril y 9 de mayo; *La Jornada*, 10 y 11 de mayo, 1997).

A pesar de que en los últimos tiempos se ha confiando el alto mando policíaco a generales, jefes y oficiales del ejército, la seguridad pública no ha mejorado y en cambio la policía se ha mostrado insubordinada; el último ejemplo de lo anterior fue el motín que escenificaron el jueves 8 de mayo medio millar de policías preventivos, originalmente asignados a la delegación de Ixtapalapa en la Ciudad de México y ahora enviados a vigilar la Gustavo A. Madero. El motín azul tuvo lugar al concluir un curso de capacitación de varios meses en instalaciones de y con instructores del ejército, curso donde se supone se inculcó a los policías, entre otras cosas, la obediencia como una virtud esencial. Probablemente los amotinados --"ya estamos hasta la madre de los militares" declararon, sentimiento compartido por los agentes cesados del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCCD)-- querían volver a sus muy establecidas y redituables contactos al sur de la ciudad --al menos eso sospechan los assembleístas del Distrito Federal (*Reforma* y *La Jornada*, 9 de mayo, *El Universal*, 10 de mayo)--, y en donde les han sustituido 2,598 soldados de la tercera brigada de la policía militar como una medida desesperada para cambiar el carácter de

la policía capitalina en vísperas de las elecciones. En cualquier caso, el motín fue eficazmente reprimidos por otros policías -- zorros y granaderos-- con su saldo de heridos y detenidos (*Reforma y La Jornada*, 8-10 de mayo). No es posible prever la evolución de la pugna policías-militares, subproducto de la creciente disfuncionalidad de un sistema político obsoleto.

Un Problema Viejo con efectos Nuevos.- Con la expansión de las operaciones del narcotráfico en México --resultado de la gran demanda de drogas prohibidas en Estados Unidos--, la añeja corrupción de nuestra policía (y ejército) no sólo ha aumentado, sino que ha evolucionado de manera negativa: ha propiciado el descontrol de ciertas agrupaciones. En efecto, algunos de esos instrumentos de fuerza del Estado ya no muestran su tradicional subordinación a los intereses de sus jefes naturales: Presidente de la República, gobernadores, Procurador General o a los secretarios de ramo. No, el gran dinero de la droga ha llevado, cada vez con mayor frecuencia, a que policías, autoridades judiciales y ciertos militares, actúen ya no como los servidores incondicionales que fueron de la clase política, sino como brazos armados del narcotráfico.

El cambio en la naturaleza de ciertos cuerpos de policía y de algunos militares, llevó a la presidencia a tomar la decisión extrema de destruir primero a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y después al INCD, como únicas vía para detener la penetración del narcotráfico en esos aparatos del Estado.

EL Costo Interno.- En el origen, los costos del descuido histórico de la clase política en la relación de sus policías con

la sociedad --subproducto de la falta de democracia-- los había pagado exclusivamente la sociedad mexicana: inseguridad, corrupción, prepotencia y humillación. Por decenios, la corrupción e ineficiencia del aparato de seguridad pública no tuvo costos importantes para la clase política, pues su monopolio del poder estaba asegurado gracias a la existencia de un partido de Estado. Sin embargo, ya terminó esa época de descuidos sin consecuencia para los responsables. Hoy, las encuestas y las elecciones muestran que los ciudadanos han comenzado a pasarle la factura a sus autoridades en éste y en muchos otros campos. Pero también queda claro que el costo interno no será el único precio que la clase política va a pagar; hay otro que le va a doler tanto o más que ese: el que le está cobrando Estados Unidos.

El Costo Externo. - Por muchos años, por decenios, la clase gobernante mexicana disfrutó frente al gobierno de Washington de una de las independencias relativas más notables en América Latina. Mientras los malos manejos internos de los gobernantes mexicanos no causaron problemas a Estados Unidos ni a los intereses norteamericanos en México, Washington dejó hacer y deshacer a la élite mexicana. Ese fue justamente uno de los orgullos del "nacionalismo revolucionario" cuando existió. Sin embargo, las cosas han cambiado y mucho.

La transformación se reflejó primero, y de manera muy dramática, en el área económica: de las "cartas de intención" firmadas con el Fondo Monetario en los años setenta y ochenta a raíz de crisis sucesivas se pasó a las draconianas condiciones que Washington impuso directamente a raíz del "error de

diciembre" del 94. Hoy esas condiciones se han ampliado al campo de lo policiaco.

A ojos del gobierno norteamericano, la tradicional corrupción policiaca y política mexicana --dos caras de la misma moneda-- dejó de ser un problema exclusivamente interno de México porque se le identificó como una de las causas que acrecentaron la introducción de drogas prohibidas al mercado norteamericano.

Desde la presidencia de Richard Nixon y la llamada "operación intercepción" en la frontera en los años sesenta, se empezó a dejar sentir la insistencia de las autoridades norteamericanas sobre sus contrapartes mexicanas para que se diera al sur del Bravo la batalla contra el narcotráfico que las propias autoridades norteamericanas no podían ganar al norte. El asesinato de un agente de la DEA en Guadalajara en 1985 incrementó esa presión y hoy -- tras el anuncio de que el propio encargado de combate a las drogas en México era parte de la cadena del narcotráfico--, ha dado otro salto cualitativo.

La nueva tensión se dejó ver ya durante la primera visita del presidente norteamericano William J. Clinton a nuestro país. Aunque los voceros oficiales y oficiosos del gobierno insisten en lo contrario, es claro que la corrupción e incapacidad de las autoridades mexicanas les ha costado sacrificar parte de su independencia frente a las norteamericanas. Veamos.

Las Nuevas Exigencias.- La misma breve estancia del presidente Clinton en nuestro país, fue ya una muestra objetiva de una relación más subordinada. La agenda bilateral se manejó casi exclusivamente en los términos norteamericanos. Luego, el

impresionante --e insultante-- aparato de seguridad que se desplegó en la Ciudad de México para proteger al presidente norteamericano y su comitiva, fue controlado de principio a fin por los norteamericanos directamente. Pero son las consecuencias de los acuerdos tomados durante la visita, lo más preocupante.

Para empezar, las extradiciones; de no enviar a ningún narcotraficante mexicano a las cárceles norteamericanas por años, de 1996 a la fecha van once, y ya se tomaron las medidas para que este proceso continúe en el futuro. Además, se aumentó el número de agentes de la DEA en México; habrá 12 nuevos elementos permanentemente en el interior del país y 21 más en las zonas fronterizas. Es cierto que expresamente el presidente Zedillo negó a esos agentes el permiso de portar armas, pero es igualmente cierto que se sabe que algunos de ellos sistemáticamente ignoran la prohibición, pues no confían, y con razón, en la supuesta protección que les brindan las autoridades mexicanas (*The New York Times*, 3 de mayo).

La disolución del tristemente célebre INCD y la creación de su reemplazo --la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Salud (FEADS)-- se anunció justo en vísperas de la llegada de Clinton a México, y para *The New York Times* (1° de mayo), el hecho no fue mera coincidencia: la Procuraduría General de la República necesitaba dar la impresión al mandatario norteamericano que se movía en el sentido deseado por Washington. El presidente Zedillo se negó a que los miembros de la FEADS tengan que ser investigados y "certificados" por los norteamericanos (quieren evitar otros casos como el del general

Jesús Gutiérrez Rebollo), pero la presión para que los norteamericanos "colaboren" con la nueva institución en la capacitación de su personal, continúan. Como también continúa la insistencia para que se permita a buques y aviones estadounidenses penetrar el espacio aéreo y marítimo mexicano cuando se vaya "persiguiendo en caliente" a naves sospechosas de contrabandear drogas, tal y como se hizo en el siglo XIX, cuando se persiguió más acá del Bravo a indios y abigeos.

Finalmente, y como sabemos, fue precisamente por órdenes del presidente Zedillo que los diputados priístas lograron disolver en agosto de 1996 la comisión de legisladores que desde 1995, y a instancias de Adolfo Aguilar Zinser, investigaba la corrupción en la empresa paraestatal Conasupo. Esa investigación buscaba saber, entre otras cosas, si la institución supuestamente al servicio de las clases populares, había sido usada por Raúl Salinas para encubrir operaciones de narcotráfico. Pues bien, esa decisión presidencial ha sido frustrada por Estados Unidos. En efecto, hoy sabemos, gracias al *Washington Post* (11 de mayo), que las operaciones de Conasupo están siendo investigadas, y desde hace tiempo, por el Departamento de Justicia norteamericano. En esas condiciones de alta presión externa, al gobierno mexicano no le ha quedado más remedio que ordenar a la Procuraduría General de la República reabrir el penoso expediente.

En suma, la élite política mexicana ya no es libre de hacer lo que quiera en casa, como antes; y aunque aún sigue sin dar cuentas de sus actos a los mexicanos, cada vez tiene que dar más a los norteamericanos.